**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, EN LO RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN 01745/INFOEM/IP/RR/2025.**

El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, aprobó por unanimidad de votos, la resolución relativa al recurso de revisión **01745/INFOEM/IP/RR/2025**, presentada por el **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, respecto de la cual, la suscrita formula **VOTO PARTICULAR,**  con fundamento en el artículo 14 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Es preciso señalar que respecto al estudio realizado en la resolución emitida resulta necesario destacar ciertas consideraciones de hecho y derecho que debieron ser valoradas.

**Antecedentes**

En primera instancia, debe precisarse que **la parte Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado,** le proporcionara la siguiente información:

*«LUGAR DE RESIDENCIA DEL PRESIDENTE Y LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COORDINADORES Y JEFES DE AREA QUE CONFORMAN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 2025-2027 DE CUAUTITLÁN, MÉXICO; ASÍ COMO MUNICIPIOS QUE SEÑALARON EN LA ENTREGA RECEPCIÓN PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.» (Sic)*

Es de precisar que el **Sujeto Obligado** respondió al solicitante a través del Titular del Área de Recursos Humanos, mediante el cual manifestó que no puede darse una respuesta a la solicitud debido a que se trata de datos personales sensibles; asimismo, se informó que el lugar para oír y recibir cualquier tipo de notificación es el domicilio del DIF Central de Cuautitlán que se ubica en Avenida 16 de Septiembre 328, interior 42, Centro, C.P. 54800, Cuautitlán, Estado de México.

Una vez conocida esta respuesta, la parte Recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, inconformándose en términos generales al considerar que no se le entregó la información solicitada, toda vez que entregan oficios en donde se limitan a decir que son datos personales sensibles, sin más justificación y carece de un acuerdo en donde se funde y motive esa limitante de acceso a la información solicitada.

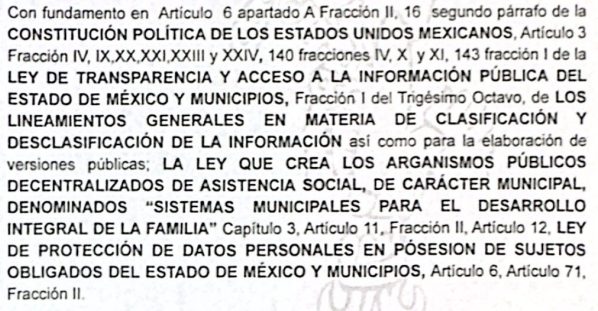
Posteriormente se admitió el recurso de revisión y en la etapa de manifestaciones, se advierte que el Sujeto Obligado adjuntó Acuerdo de versión pública de documentación de servidor público del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán, Estado de México, como confidencial y reservada número SMDIF/UTRA/001/2025 suscrito por los integrantes del Comité de Transparencia el veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, por medio del cual se fundamenta y motiva la clasificación de la información relativa al domicilio de los servidores públicos referidos en la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, mientras que la parte Recurrente fue omisa en pronunciarse en esta etapa, por lo que se tuvo por precluido su derecho para tal efecto.

Una vez analizadas las constancias del expediente electrónico por parte de este Instituto, se determinó que lo pertinente era **SOBRESEER** el presente asunto porque al haberse modificado la respuesta, el recurso de revisión quedó sin materia conforme a lo dispuesto en el artículo 192 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

1. **Razones del Voto Particular**

Acotado lo anterior, resulta importante señalar que la emisión de mi voto particular deviene de que a mi consideración, el acuerdo remitido por el Sujeto Obligado no se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que en él se aprueba la realización de la versión pública de documentos, no así una clasificación total de la información, pues no le fue proporcionado ningún documento en versión pública al particular, por lo tanto, en aras de otorgar certeza jurídica al particular, debió ordenarse la emisión de nuevo acuerdo que cumpliera con las formalidades establecidas por la ley en la materia.

Lo anterior se afirma así, en virtud de que al realizar el análisis del presente acuerdo, se observa que el Sujeto Obligado en el apartado de fundamentación hace referencia a causales de reserva, tal como se observa en la siguiente ilustración:



Es de precisar que conforme a la Ley de Transparencia aplicable a la entidad, dichas causales de reserva consisten en lo siguiente:

*“Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*…*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*…*

*X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

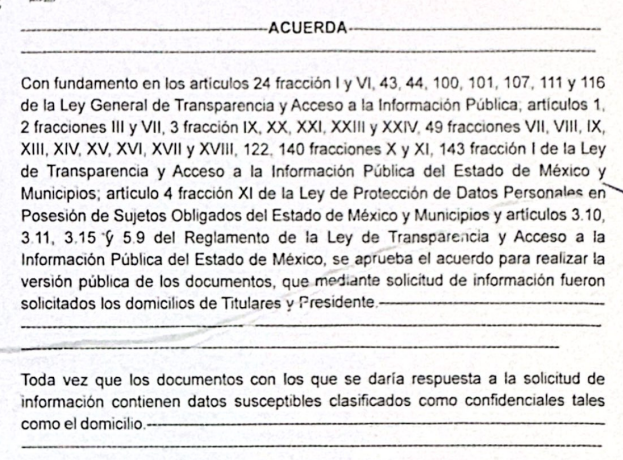
*XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

Del análisis a las causales invocadas, se observa que el Sujeto Obligado no acreditó la actualización de estas fracciones al caso concreto, aunado al hecho de que toda vez que el particular está solicitando domicilios de servidores públicos, debemos resaltar que a estos datos le revisten el carácter de confidencial.

Lo anterior se afirma así, en razón de que el artículo 2.17, del Código Civil del Estado de México, señala que el domicilio «es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle».

En ese contexto, se reitera que el dato sobre el domicilio particular es información de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 143, de la Ley de la materia, así como el artículo 4, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, en virtud de que constituye información que incide en la intimidad de un individuo identificado.

Por lo que lo pertinente en el presente caso es l**a clasificación total de la información, no así una generación de versión pública**, como lo pretendió hacer valer el Sujeto Obligado mediante el acuerdo presentado en informe justificado, el cual se trae a colación para mejor proveer del presente voto:



En ese sentido, es relevante señalar que para el caso particular, la clasificación de la información como confidencial, se actualizará cuando por su naturaleza, contenga datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y la que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

De igual forma, para el caso de la información confidencial se aprecia, que se establece un procedimiento para clasificar la información como confidencial, mediante el cual se fundamentará y motivará la necesidad de clasificar la información, en el que se precisen los motivos que obliguen a la clasificación; lo que se consolida con lo señalado por el artículo 168 de la Ley en la Materia, que señala:

*“****Artículo 168****. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:*

***I.*** *El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que* ***funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia****, mismo que deberá resolver para:*

*a****) Confirmar la clasificación;***

*b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

***II.*** *El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y*

***III.*** *La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley.*

Hechas estas precisiones, se advierte que el **Sujeto Obligado** no cumplió con lo señalado en lo procedente, toda vez que el acuerdo del Comité de Transparencia no funda y motiva de manera correcta la clasificación de los domicilios, creando con ello una incertidumbre jurídica al particular por señalar que se genera una versión pública pero al mismo tiempo invoca una clasificación como reservada y confidencial, contraviniendo lo establecido por el artículo 9, fracción I, VI, VIII y 11 párrafo primero de la ley de la Materia.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.*** *La* ***debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento****.*

***…”***

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación* ***y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa****. Por tanto,* ***no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa****, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente****, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción****.” Énfasis añadido.*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que en el acto de autoridad, además de contener los supuestos jurídicos aplicables debe explicar claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada podrá impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, circunstancia que en el presente asunto no sucedió.

Aunado a ello no se debe perder de vista que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, los cuales deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia, vigente a la fecha de la solicitud, al respecto, conviene referir que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México establece lo siguiente:

***Artículo 131.******La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación*** *previstos en esta Ley* ***corresponderá a los sujetos obligados; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información****, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

***Artículo 132.******La clasificación de la información se llevará a cabo*** *en el momento en que:*

***I.******Se reciba una solicitud de acceso a la información****;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*Tratándose de información reservada, los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud, para verificar si subsisten las causas que le dieron origen.*

***Artículo 134.******Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general*** *ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

***En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información****.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.*

***Artículo 135.*** *Los lineamientos generales que se emitan al respecto en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

*(Énfasis añadido)*

De la normatividad se aprecia que l**a** carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación corresponde a los sujetos obligados; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información, la cual se llevará a cabo en el momento en que *se reciba una solicitud de acceso a la información;* *determine mediante resolución de autoridad competente; o* *generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia,* cabe mencionar que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general, en donde no se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información, es decir, la clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, formalidades que en el presente asunto no fueron observadas por el **Sujeto Obligado**.

En conclusión, si bien es cierto, el acuerdo hace referencia a la clasificación del domicilio de los servidores públicos, no menos cierto es que dicho acuerdo no se emitió con las formalidades establecidas en la norma jurídica, por lo tanto, lo pertinente era ordenar la emisión de un nuevo acuerdo que contemple la clasificación total de la información solicitada.

No obstante, al no contemplar dicha circunstancia en la resolución es que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la suscrita Comisionada emite el presente **VOTO PARTICULAR** en los términos precisados.